



EL MUNDO QUE CAMBIA: CONVERSACIONES SOBRE TEMAS PENDIENTES Y EMERGENTES

Debate 3: "Cambios en el escenario político regional y retos para las pautas de género, sexualidad y derechos humanos"

El mundo que cambia: conversaciones sobre temas pendientes y emergentes

Debate 3: “Cambios en el escenario político regional y retos para las pautas de género, sexualidad y derechos humanos”

Relatoría: Mariana Carbajal

Revisión: Nana Soares

Editora: Sonia Corrêa

Diseño gráfico: Agência FW2 / <http://www.fw2.digital>

Realización:



Apuntes sobre el webinar “Cambios en el escenario político regional y retos para las pautas de género, sexualidad y derechos humanos”

En los últimos años, América Latina y el Caribe han experimentado importantes cambios políticos, entre los que destaca el resurgimiento de la ultraderecha, en disputas electorales. Este fenómeno trasciende el continente, situándose en un contexto más amplio de reconfiguración global de la derecha. Sin embargo, también se articula a nivel regional, donde los actores más importantes tienen conexiones de facto entre sí y actúan en espacios nacionales y también internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA).

También en los últimos años se han producido importantes revueltas sociales populares en varios países de la región, sobre todo en Chile, Colombia y Ecuador. En esas manifestaciones se expuso y se reclamó por problemas estructurales de cada nación -la constitución que data desde tiempos dictatoriales, el colapso social tras décadas de austeridad. Pero en esa dinámica hay también que tener en cuenta el descrédito creciente de la población en relación a los sistemas políticos y sus representantes. No sorprendentemente, en años recientes varios países han vivido las elecciones más feroces y polarizadas de su historia, con candidatos de una extrema derecha fortalecida, articulada y con apoyo popular, donde el ejemplo más rotundo fue el triunfo de Bolsonaro en Brasil en 2018.

Por otro lado, en varios de esos procesos electorales, la “izquierda”—en una definición amplia y con muchas comillas—volvió al poder ejecutivo por vía democrática en las cinco mayores economías de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México y también en Perú (hasta diciembre de 2022). Sobre todo, asistimos a la llegada al poder de figuras muy conocidas como López Obrador en México, Petro en Colombia y más especialmente el retorno de Lula a la presidencia en las muy riesgosas elecciones de Brasil de 2022. En este contexto, se refuerza la necesidad de tener elementos para examinar más a fondo esa escena paradójica, buscando identificar lo que hay ahí de nuevo. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta reconfiguración política que la hicieron posible? ¿Qué tendencias de curso largo como populismo, están en juego en ese nuevo paisaje? ¿Cuáles son los viejos y nuevos riesgos de las actuales condiciones políticas regionales? En especial, ¿qué espacios se abren o se cierran para las pautas de derechos humanos, género, sexualidad y aborto?

Con el objetivo de analizar este panorama, Sexuality Policy Watch, Akahatá, Promsex, Puentes y Synergia convocaron a un webinar, en el marco del foro El mundo que cambia: conversaciones sobre temas pendientes y emergentes, que se llevó adelante de manera virtual el 24 de noviembre de 2022. Durante el encuentro, moderado por Sonia Corrêa, expusieron tres politólogas, Ana Covarrubias (de Colegio de México), Eliana Carlin (de la Universidad del Pacífico en Perú) y Talita Tanscheit (de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro en Brasil e investigadora de la Universidad Diego Portales en Chile) y luego intervino como comentarista el politólogo Mario Pecheny (Coordinador del CONICET en Argentina).

Ofrecemos una síntesis de esos intercambios en las páginas siguientes. Corrêa empieza haciendo un repaso del panorama regional. En seguida los contextos nacionales de México y Perú son examinados más de cerca y además hay una mirada cruzada sobre las dinámicas en curso en Brasil y Chile. Esos contenidos se han basado predominantemente en las intervenciones hechas en el debate pero también cuentan con aportes adicionales que vienen de otros análisis disponibles sobre los temas abordados.

Cabe destacar que el webinar tuvo lugar en noviembre, y al poco tiempo tanto Perú como Brasil -- dos de los países sobre los que se habló extensamente en el encuentro-- se vieron sacudidos por sendas crisis políticas, ambas seguramente predecibles pero de todos modos sorprendentes.

UN PANORAMA CAMBIANTE

Sea por donde se mire, el panorama regional es hoy cambiante, complejo, paradójico y riesgoso. La región ha experimentado transformaciones profundas, reconfiguraciones en el orden político institucional y hemos asistido a varias situaciones de crisis, sean ellas agudas o continuadas. Por otro lado, con el retorno de fuerzas de izquierda democrática al poder del Estado (recordemos que seguimos enfrentando izquierdas con clara degradación democrática en Cuba, Venezuela y más recientemente Nicaragua) hay claras señales de cambio, incluso de una revitalización del regionalismo, lo cual había sido abandonado en la última década cuando las fuerzas de derecha habían ganado mucho espacio y abiertamente disputado el poder del Estado. Los nuevos gobiernos de izquierda han tenido victorias en un contexto de ascenso y consolidación de la ultraderecha en América Latina y en el mundo.

En la región el caso más emblemático es el de Bolsonaro que acaba de perder la elección en Brasil. Pero, el gobierno de Bukele, con un perfil más heterodoxo, sigue muy robusto en El Salvador y es siempre necesario observar que Cabildo Abierto, un partido de ultraderecha, está en la coalición de gobierno en Uruguay. Además, la derrota de Bolsonaro, en octubre de 2022, no significa que sus bases políticas o las pautas de ultraderecha vayan a desaparecer como, incluso, se ha visto claramente en la brutalidad de la invasión y depredación de las instituciones de la democracia en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Como subrayan Sonia Corrêa y Juan Elman en un artículo para Open Democracy, el horizonte de supervivencia de la ultraderecha no es un trazo singular de Brasil, pero sí regional.¹ Entendiendo acá la ultra-derecha como conjuntos heterogéneos de fuerzas que impulsan un proyecto de orden social y político jerárquico y reaccionan ante cualquier tipo de transformación como una amenaza a cierto orden tradicional o natural.

En Argentina, la ultra derecha ganó mucho espacio en las legislativas de 2021, siendo Javier Milei su figura más icónica. En Chile, Kast hoy no es solamente un opositor vigoroso del gobierno de Boric sino que se ha convertido en un vocero global de la ultraderecha regional. También hay que considerar que fuerzas de una derecha convencional pero también de la derecha más extremada



¹ Disponible en <https://www.opendemocracy.net/es/5050-es/brasil-elecciones-bolsonaro-extrema-derecha-america-latina/>

están presentes en los legislativos y ocupan espacios en los ejecutivos de muchos países. En Perú, hace tiempo que el sector Fujimorista tiene una fuerte presencia en el Congreso. Fuerzas ultraconservadoras tampoco han desaparecido del escenario político colombiano y también tienen presencia o son muy influyentes en la política estatal de Ecuador, Paraguay, Guatemala. Lo mismo pasa en Honduras, aun cuando un gobierno de izquierda haya sido elegido en 2021.

Cuando se examinan las políticas del género, sexualidad y derechos humanos las paradojas también son muy flagrantes. Por un lado, en las últimas dos décadas, el escenario regional ha cambiado por efecto de la explosión feminista de las últimas dos décadas, fruto de la autoorganización y de la acumulación histórica de movimientos de mujeres y feministas. De eso resultó una masificación del feminismo en el debate público de los países de la región, con una perspectiva más amplia de los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales.

También se ha legitimado la perspectiva de transversalización de la agenda de género en las instituciones y el Estado en cada una de las políticas públicas: ya no alcanza con tener 'ministerios de las mujeres'. Pero todavía la participación política de las mujeres sigue baja en muchos países y sigue limitada la presencia de mujeres feministas en lugares de decisión. En el ámbito de las sociedades, a su vez, la ola verde y sus pañuelos fue una consigna regional que traspasó las fronteras argentinas e incluso regionales. Ese símbolo de la lucha por el derecho al aborto ya no se usa solamente en manifestaciones callejeras, sino que puede verse en muchos otros espacios.

Dinámicas semejantes han tenido lugar en el campo de los derechos LGBTTI+ que han tomado cuerpo desde los años 1980 por efecto de la redemocratización y de las luchas en torno al VIH/SIDA. Y luego en marchas del orgullo cada vez mayores, en cambios culturales muy visibles, y en reformas legales o decisiones judiciales muy significativas que han legitimado el matrimonio igualitario y los derechos de identidad de género en varios países.

La reacción de sectores de derecha o conservadores a esos cambios viene desde hace tiempo pero sus características han cambiado a lo largo del tiempo. En los '90 la derecha regional impulsaba con vigor una agenda socioeconómica neoliberal y en algunos casos era refractaria o estaba aliada a sectores que se oponían a los derechos humanos en el ámbito del género y de la sexualidad. Pero eso no era una regla general, ni implicaba obstáculos insuperables. En las condiciones actuales la ultraderecha también tiene fuerte adherencia a la agenda neoliberal, pero a esa agenda económica se han añadido otros objetivos como políticas más duras de seguridad y de militarización creciente y nuevas lógicas xenofóbicas de rechazo a los migrantes y sobre todo las cuestiones del género y de la sexualidad son un nudo duro de sus proyectos de sociedad. Un efecto muy importante de esa reconfiguración es que casi en todos los países la antigua derecha, con mayor compromiso con la democracia, se viene desdibujando, con mucha rapidez.

El otro aspecto crucial es que las fuerzas de ultraderecha se oponen férreamente al aborto, a los derechos LGBTTIQ+, a la educación sexual integral, a los derechos sexuales y reproductivos porque, como se ha dicho, esas esferas de la vida están en el cimiento de su proyecto político. Esas pautas, desde mucho insufladas por el campo religioso ultraconservador, son ahora objeto de amplias movilizaciones sociales y sobre todo cuentan con el creciente apoyo de sectores seculares

muy heterogéneos. Son ejemplos el movimiento *Escola Sin Partido*, que surgió en Brasil en 2003 y ganó mucho vigor a partir de 2013, y la campaña *Con Mis Hijos No Te Metas*, creada en Perú en 2016, que actúan ferozmente contra la educación en género y sexualidad. También hay que contabilizar ataques a la producción de conocimiento en género en Brasil y en Chile y fuertes movidas contra el derecho al aborto en muchos países. Esas movilizaciones componen el ambiente más amplio fomentado por las llamadas políticas antigénero que, desde hace una década, vienen activando pánicos morales en torno a fantasmas de pedofilia y desorden sexual, acusan a los feminismo y al activismo LGBTTI+ de impulsar un proyecto de "destrucción de la familia", al mismo tiempo que asocian abiertamente el género al marxismo o comunismo, por ende insuflando lo que podría denominar como pánico político.

Lo que pasa hoy se distingue tanto de los ataques a las pautas feministas y de derechos LGBTTI del pasado como implica diferencias marcadas frente a las agendas y métodos políticos de la llamada derecha convencional que hasta recién había sido mayoritaria en la región. Sin embargo, los partidos políticos de la izquierda no han captado todavía esa reconfiguración. Hay que decir que el compromiso de los partidos de izquierda con las agendas de género, sexualidad y derecho al aborto nunca ha sido muy robusto, más bien tímido y volátil. Hoy, en diferentes contextos, frente al avance de la derecha radical --que ha hecho de esas cuestiones sus blancos prioritarios--, la izquierda sortea con facilidad la agenda de los derechos sexuales y reproductivos para "no perder el voto conservador" o componer con los sectores más a la derecha del espectro político.

En el debate se han presentado algunos ejemplos de esas "paradojas". Por ejemplo, las políticas migratorias que ahora se hacen vinculadas a la cuestión de "la seguridad". Gobiernos que son considerados de izquierda, como los de Rafael Correa en el pasado y el más reciente de Pedro Castillo que han sido muy conservadores y reaccionarios en relación al género y a los derechos sexuales y reproductivos. La "novedad" de las mujeres de derecha altamente organizadas que ocupan lugares de poder, como fue el caso de la pastora Damares Alves, exministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos en el gobierno de Jair Bolsonaro. Pero figuras con el mismo perfil también están presentes en los congresos de Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica y México. En Argentina, incluso, mujeres ultraconservadoras han militado dentro del movimiento del pañuelo celeste para contraponerse a la "ola verde".

En un plan más filosófico, como subrayó Mario Pecheny en sus comentarios, el escenario regional evoca las reflexiones de Hannah Arendt sobre los seres superfluos porque tanto el neoliberalismo (que sigue su curso), como las formaciones de la ultra-derecha en ascenso consideran ciertas personas y grupos poblacionales como superfluos: como lxs muy pobres, lxs migrantes, personas LGBTTI, indígenas y población negra. Esa "gente superflua" es vista como otras especies, ríos, mares, ciertos paisajes, cuya desaparición, en la visión de la ultraderecha, no haría diferencia. Esa misma ideología se ha manifestado durante la pandemia de Covid 19 cuando algunas voces decían abiertamente que personas mayores o muy enfermas podrían ser descartables. En consecuencia, en la mayoría de los países, los movimientos sociales en un sentido amplio y las voces progresistas o de izquierdas han sido empujadas hacia una pauta básica: la defensa elemental del Estado de derecho de la democracia formal y de condiciones mínimas de supervivencia para la mayoría de la gente.

Estos son también tiempos en los que están desestabilizados “parámetros de certidumbre” que alimentaban los imaginarios de las sociedades y aún más del campo conservador en torno a proyectos de “vida estables y en común”. Por ejemplo, la idea clásica de que a través del esfuerzo en educación y en el mercado de trabajo, en el mediano o largo plazo, se recibiría una recompensa de movilización social ascendente está puesta en jaque. Aunque eso no fuera cierto, en el pasado constituía un horizonte, pero ahora las personas jóvenes dudan de que eso sea posible. Del otro lado, las certidumbres conservadoras sobre las familias, sus relaciones jerárquicas y la heteronormatividad han sido resquebrajadas por las luchas feministas y de los activismos LGBTTI: las jerarquías de género, los supuestos valores familiares que organizaban al varón como propietario/proveedor, la heteronorma y el binarismo. Frente a esas incertidumbres la reacción del campo religioso ultraconservador y de la ultra derecha es claramente restaurar las ilusiones de ese “mundo amenazado”. En especial, la familia modelo único, patriarcal y heteronormativa que en su visión tendría el atributo adicional de reducir las responsabilidades y los costos del Estado proveedor.²

CONTEXTOS NACIONALES

México

Teniendo esos lineamientos interpretativos como telón de fondo es interesante rescatar brevemente las dinámicas en curso en los contextos nacionales que han sido examinadas más de cerca en la conversación. Analizando la situación en México, Ana Covarrubia subrayó que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en diciembre de 2018 se esperaba un gobierno con una agenda de izquierdas. Sin embargo, aun cuando AMLO mantenga un elevado nivel de popularidad (más de 60%) su gestión corresponde a un “resultado mixto”. En términos de política exterior, por ejemplo, el sesgo más fuerte es la “buena” relación de López Obrador con Estados Unidos, incluso con Trump. EE.UU. fue el primer país que visitó AMLO poco después de asumir y para eso tuvo que ponerse barbijo y hacerse un test de Covid-19, al que se resistía.

Cuando estaba en campaña, mucho antes de su elección en 2018, López Obrador anunció que iba a tener una política de puertas abiertas a la integración centroamericana, incluso a los migrantes de Centro América. Pero en 2017 Trump llegó al poder y cerró la frontera y desde ahí su posición cambió. Después de elegido lo que hace es enviar a la Guardia Nacional a contener la migración en el sur del país y en la frontera con Estados Unidos. Y, desde entonces, México recibe los migrantes ilegales que manda Estados Unidos de regreso, los cuales siguen viviendo en situación muy precaria en el país.

Al mismo tiempo, AMLO mantiene relaciones ambiguas con América Latina. Dejó de apoyar los esfuerzos internacionales con vistas a la redemocratización de Venezuela, pero ofreció México como mediador entre el gobierno de Maduro y la oposición. Nunca ha condenado a la dictadura



² Como lo ha declarado, sin ningún pudor, Angela Gandra Secretária de la Família del gobierno Bolsonaro en un artículo publicado en Folha de São Paulo em diciembre de 2021. Accesible en <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/12/um-ministerio-da-familia-da-utopia-a-realidade.shtml>

de Ortega en Nicaragua y relanzó una relación con Cuba "muy cercana". Si por un lado mejoró la relación con la Argentina de Alberto Fernández, su acercamiento con Boric y Petro no es tan caluroso. En relación a Brasil, tomó un justificable distanciamiento con Bolsonaro pero ahora manifiesta mucho entusiasmo con el triunfo de Lula. Es decir, sus relaciones con las izquierdas democráticas regionales son desiguales pero es muy precavido con criticar gobiernos de izquierda que "pueden cuestionarse si son democráticos o no".

A AMLO "solo le interesa que los asuntos internacionales no representen un obstáculo para su proyecto interno" y, por esa razón, la agenda de política exterior esta delegada en Marcelo Ebrad el canciller, que tiene una visión más abierta. Pero hay temas y cuestiones en los que sigue teniendo la última palabra. Su estilo de política exterior contrasta abiertamente con la apertura al mundo y a las relaciones multilaterales que marcó la política mexicana, incluso durante la gestión del PAN en los años 2000 y de Peña Nieto del PRI (2012-2018).

Covarrubia también subrayó que se registra hoy en México una remilitarización, lo que es muy preocupante. Una primera ola de militarización tuvo lugar durante el sexenio de Calderón (PAN 2006 -2012), cuando el ejército fue directamente involucrado en el combate al narcotráfico sin que eso tuviera buen resultado. Esa política que fue abandonada en el gobierno de Peña Nieto, fue de hecho amplificada por López Obrador. Un artículo de Ramón Centeno publicado en noviembre de 2022 analiza como el decreto de reforma constitucional 235 de marzo de 2019:

regularizó la militarización por cinco años, hasta 2024, pero además creó a la Guardia Nacional en sustitución de la Policía Federal. La Reforma 235 no solo completó lo que Calderón comenzó, sino que lo superó al colocar a la nueva corporación armada, la Guardia Nacional, bajo mando militar y subordinada al Ejército, a diferencia de su predecesora, la Policía Federal, que tenía mando civil y estaba subordinada a una institución civil, la Secretaría de Seguridad Pública.³

Esas re-definiciones en relación a los militares no pueden ser disociadas de otras dinámicas políticas más recientes, como por ejemplo, la propuesta de reforma electoral promovida por López Obrador que fue objeto de una manifestación masiva en el DF algunos días antes del webinar.⁴ Muchos análisis levantan la hipótesis de que hay una movida de AMLO que apuntaría a vaciar el sistema multipartidario instalado en el país desde el año 2000.⁵

3 Ver artículo completo en <https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2022/11/17/militarizacion-mexico-presidencia-amlo/>

4 Ver <https://elpais.com/mexico/2022-11-13/la-oposicion-lleva-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador-a-las-calles.html>

5 Ver <https://elpais.com/mexico/2022-11-11/lorenzo-cordova-quienes-están-en-el-poder-creen-que-si-controlan-al-ine-evitaran-que-haya-alternancia.html>

Otro aspecto marcante del contexto mexicano, que debe ser situado en relación a esas otras paradojas, es el fuerte contraste entre las posiciones de AMLO y sus aliados y altos funcionarios en temas de género, sexualidad y derecho al aborto. Figuras como Claudia Sheinbaum, la actual gobernadora del DF, Olga Sanches Cordero, que fue su Secretaria de Gobernación, o el mismo Marcelo Ebrad, tienen un claro compromiso con la igualdad de género, el derecho al aborto y los derechos humanos en general. Pero López Obrador, desde el inicio de su mandato se ha revelado extremadamente conservador en relación a esos temas. Esas posiciones no son casuales pero se explican por el hecho que López Obrador --como analiza Careaga en un estudio del 2020-- no solamente es evangélico sino que tiene relaciones políticas orgánicas con ese campo religioso.⁶

Esa combinación es posiblemente lo que explica por qué sus posiciones personales, aunque problemáticas, no hayan impedido avances muy significativos en relación al derecho al aborto que fue "nacionalizado" por una decisión de la Corte Constitucional de Justicia de 2021, pero también reformas legislativas estatales que hacen que el matrimonio igualitario esté hoy aprobado en todos los países y que en muchos estados se hayan adoptado leyes avanzadas de derecho a la identidad de género.

En lo que concierne a la presencia de las fuerzas de derecha, Covarrubias observó que por ahora la ultraderecha parece estar frenada en México. La antigua derecha, o sea el PAN, que en algún momento incluyó corrientes de extrema derecha, está desdibujado y desacreditado. Pero hay muchas fuerzas ultraconservadoras movilizadas en la sociedad, sea vinculadas a un sector de la Iglesia Católica sea a las agrupaciones evangélicas. Pero habría quizás que preguntar: ¿dónde está ubicada ahora esa derecha más radical? ¿A quiénes aglutina? Incluso, por qué escenario podrá cambiar, dependiendo cómo evolucione todavía el gobierno de López Obrador. Viendo lo que sucedió en Brasil, no está excluido el riesgo de que surja una figura con capacidad de aglutinar esas fuerzas y agendas que ahora parecen dispersas.

Perú

El webinar tuvo lugar algunos días antes de la crisis que terminó con la destitución del presidente Castillo en Perú el 7 de diciembre de 2022. Ese hecho confirma la inestabilidad política que, según Eliana Carlin, caracteriza ese país en años recientes. Por ejemplo, la pandemia en Perú fue atravesada con tres presidentes diferentes: uno al inicio, otro que duró cuatro días en mitad de la pandemia y el último hasta la elección de Castillo. La sucesora de Castillo, Dina Boluarte -- que había sido elegida vicepresidenta junto a Castillo en 2021--, se convierte en la primera presidenta en la historia de Perú, pero también es la sexta jefa del Estado peruano desde 2018 (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo la precedieron). En este contexto de crisis sistémica y continuada, marcado por una lucha permanente por la supervivencia política, el espacio para la agenda de género y salud sexual y reproductiva, e interculturalidad, quedó casi totalmente acotado.



6 Como analiza Careaga e sus estudio sobre políticas antigénero em México publicado em 2020. Ver <https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-M%C3%A9xico%2020200203.pdf>

Perú es el tercer país con más cantidad de muertos como consecuencia de la pandemia de Covid, en la región, luego de Brasil y México, con alrededor de 217.000 personas fallecidas, en su gran mayoría hombres. Se calcula que la pandemia ha dejado entre 98.000 y 100.000 nuevos huérfanos. También ha implicado sobrecarga del requerimiento de labores de cuidado que usualmente recae sobre la población femenina o feminizada. Existe una ley que creó un Sistema Nacional de Cuidados pero se ha avanzado de forma muy incipiente en su implementación. En consecuencia, el país durante la pandemia vivió una crisis sin precedentes desde el punto de vista de la política social en especial en los ámbitos de salud e igualdad de género, la cual afecta sobre todo la población más vulnerable y empobrecida de Perú.

Esta situación coincide con el proceso electoral de 2021 que llevó a Castillo al poder significando una nueva derrota de Keiko Fujimori, la hija del ex dictador. Desde hace algunos años Keiko se presenta en las elecciones con un apoyo muy fuerte de grupos de extrema derecha, sobre todo religiosos, tanto católicos como evangélicos. En las últimas elecciones, esa fuerza se ha manifestado de manera muy agresiva en relación a temas de género y salud reproductiva pero también en términos políticos. Fueron derrotados por apenas 40.000 votos y en la segunda vuelta, lo que desencadenó condiciones para que se levantara –como en Estados Unidos y un mes más tarde, en Brasil-- acusaciones de fraude, negación de los resultados electorales y esfuerzos por impugnar las elecciones.

En Perú, esa contestación fue hecha no por el partido político derrotado, sino que por abogados reconocidos y de manera muy abierta. Con absoluta impunidad, esas figuras han declarado que iban a identificar zonas rurales en donde pudiera haber más posibilidades de encontrar algún vicio, error o fallo material en las papeletas para así poder anular las elecciones. El resultado no pudo ser volteado, pero llama atención que los sectores tradicionalmente conocidos como progresistas, han mantenido silencio frente a esa estrategia.

Una fuerte paradoja del contexto peruano es que, como consecuencia de la Ley de la Paridad de Alternancia, el Congreso tiene por primera vez 50 mujeres entre 130 parlamentarios. Pero la mayoría de ellas se ubican en el campo conservador y, sobre todo, el Congreso mismo tiene escasa legitimidad, con una aprobación ciudadana de alrededor del 9% en noviembre de 2022, cuando el Ejecutivo tenía 26%. Además, en las elecciones locales de octubre de 2022 fue elegido como alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un empresario vinculado al Opus Dei y candidato de Renovación Popular, un partido de ultra-derecha. Aliaga es conocido por haber declarado públicamente que se produce mortificaciones por vocación religiosa y ha lanzado propuestas lamentables de política pública como plantear que las niñas que son violadas y resultan embarazadas sean hospedadas en un hotel cinco estrellas, de su propiedad, para ser atendidas durante la gestación.

Con todo eso, al final de 2022 sobrevino una crisis aún más grave. El día 7 de diciembre, Pedro Castillo dio un mensaje inesperado en televisión nacional. Anunció el inicio de un "gobierno de excepción", el cierre del Congreso de la República y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Ese anuncio resonaba al año 1992 cuando Alberto Fujimori había hecho lo mismo. La diferencia entre los dos momentos es que el auto golpe de Pedro Castillo no se consolidó. Fue un intento fallido de romper las normas democráticas del país.

¿Qué elementos diferencian los resultados de estos dos procesos? A diferencia de Fujimori, Pedro Castillo postuló con un partido regional y de izquierda y nunca contó con el apoyo del *establishment*. Otro elemento diferenciador crucial es que al inicio de los 1990 Perú vivía una crisis política y económica aún más grave: hiperinflación y escasez de productos de la canasta básica familiar y un cuadro de más de una década de violencia terrorista. En tal circunstancia la propuesta de mano dura de Fujimori tuvo, de inicio, amplio apoyo de las elites, pero también de otros sectores sociales afectados por la violencia política. Aun contando con apoyo en el interior del país, Castillo no tenía fuerzas para imponer un régimen fuerte bajo su comando. Fue destituido por el Congreso y en el camino de pedir exilio en la embajada mexicana fue arrestado.

Las reglas constitucionales establecían que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, debía asumir el mandato y eso se hizo, aun cuando unos días antes, Boluarte hubiera renunciado al gabinete ministerial de Castillo, en donde fue Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Pero poco después de su discurso inaugural cuando aseguró que gobernaría hasta 2026, empezó una reacción inmediata y muy amplia a la destitución y prisión de Castillo, especialmente en el interior del país. En respuesta, la primera medida tomada por Boluarte fue decretar un Estado de Emergencia.

En las primeras dos semanas de su gobierno, como primera presidenta del Perú, se registraron al menos 27 muertos en protestas sociales en distintas regiones: Ayacucho (10), Apurímac (6), Junín (3), La Libertad (2), Cusco (3) y Arequipa (3). Cinco de los fallecidos eran menores de edad. Ante la crisis social y la renuncia de dos ministros, ocurrió un prematuro recambio ministerial. El ministro de Defensa a cargo de estos operativos que costaron 27 vidas, fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros encabezando un gabinete absolutamente conservador y de corte militarista.

Además del estado de emergencia y de los asesinados (la gran mayoría por herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza, cuello, tórax o abdomen) hay otras señales fuertes de un rápido debilitamiento de la democracia. Boluarte ha hecho un Mensaje a la Nación en cadena nacional acompañada por militares y policías nombró como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia a un militar vinculado a Vladimiro Montesinos (quien fue asesor de Alberto Fujimori y está sentenciado por graves violaciones a los derechos humanos).

En diciembre de 2022, cuando una primera versión de este informe se estaba finalizando las demandas sociales reclamadas en las protestas eran muy diversas. Parte de la ciudadanía pedía la liberación de Pedro Castillo y la renuncia inmediata de Dina Boluarte, pero de manera más amplia se clamaba por el cierre inmediato del Congreso y una nueva Constitución Política. El 21 de diciembre de 2022, los congresistas aprobaron la primera votación de un adelanto de elecciones, para abril de 2024, pero la decisión requiere una segunda votación en la siguiente legislatura, que inicia en febrero de 2023.

Pero ese desarrollo no está garantizado dado que, desde diciembre, tanto las protestas como la represión se han agudizado. El 21 de enero de 2023, las fuerzas policiales y del ejército han invadido la Universidad de San Marcos donde manifestantes estaban protegidos de la represión.

Esa escena ha tomado las páginas y los telones cuando aún se estaban procesando las imágenes de la destrucción del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y del Palacio del Planalto en Brasilia.

Se supo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Perú justo después del intento de golpe de Estado y la destitución del cargo del ex presidente Pedro Castillo (19 al 21 de diciembre 2022) y en una segunda oportunidad del 11 al 13 de enero del 2023 para observar la situación de los derechos humanos en el marco de la crisis institucional y de las protestas sociales. La CIDH visitó diferentes regiones del país, como parte de la misión técnica preparatoria de la próxima visita de monitoreo de crisis. En una conferencia de prensa que ocurrió después de esas averiguaciones la CIDH: a) destacó discriminación étnica en los abusos contra DDHH; b) llamó a reglamentar mecanismos legales como la vacancia que generan inestabilidad política; c) denunció el terruqueo institucionalizado por autoridades; d) señaló que la protesta es el único recurso de una población discriminada estructuralmente; e) llamó a investigaciones serias y prontas bajo la rectoría de la Fiscalía de DDHH; f) señaló que no hay elementos que comprueben la participación de Evo Morales en las protestas.

Chile

Chile es hoy una especie de caja de resonancia de las transformaciones y paradojas que marcan el panorama regional. El retorno de la izquierda al poder comenzó con las elecciones hondureñas y chilenas de 2021. Pero los resultados chilenos tuvieron mayor visibilidad por varias razones: la historia política del país, el estallido social que precedió a las elecciones y, sobre todo, porque fue derrotada una figura emblemática de la derecha regional.

Sin embargo, el Rechazo de la Reforma Constitucional en septiembre de 2022 dejó claro que aunque derrotada electoralmente la ultraderecha no perdió fuerza e incluso puede haber ampliado su base social. Según Talita Tanscheit, la derrota de Bolsonaro podría acabar dañando el proyecto político de Kast. Por otra parte, los estudios que examinan las causas del rechazo informan de que en el plebiscito constitucional la derecha chilena, de hecho, consiguió movilizar capas profundas del conservadurismo en la sociedad chilena.

Por ejemplo, el proyecto de investigación sobre la derecha regional en el que participa Talita hizo una serie de grupos de discusión para conocer los sentimientos de la gente hacia Kast. La investigación se formuló en términos de amor y odio al personaje y los resultados son muy interesantes. Muestran, por ejemplo, que el grupo y los votantes que "aman a Kast" es muy homogéneo, mientras que el grupo de los que "odian a Kast" es mucho más heterogéneo en términos de visión del mundo. Además, una de las razones por las que el primer grupo tiene en alta estima a Kast se debe, de hecho, a su perfil híper conservador: "es un hombre de familia, está casado, va a la iglesia, tiene un perro". Por otra parte, el grupo al que no le gusta Kast critica duramente su defensa de la familia tradicional.

Estos resultados confirmaron que la familia --y sus significados en términos de género y sexualidad-- representa un parteaguas entre la izquierda y la derecha en la sociedad chilena. Hay que decir que la "defensa de la familia" no aparece entre las motivaciones de quienes votaron

Rechazo detectadas en otras encuestas, que identificaron como factores principales: la mala valoración del proceso constituyente y el desacuerdo sobre la definición del país como un estado plurinacional. Pero no es excesivo suponer que el "malestar" con las definiciones relacionadas con cuestiones de familia, género y sexualidad incluidas en la reforma constitucional también debería tenerse en cuenta. Además, porque, como analizó la propia Talita en un artículo conjunto con Pedro Abramovay (publicado en Brasil), la campaña de desinformación promovida por la ultraderecha contra Apruebo fue enérgica. Incluía noticias falsas sobre el trabajo de los constituyentes, pero también sobre la definición del derecho al aborto en el texto constitucional.

Este conservadurismo inercial que puede activarse fácilmente conduce a otra cuestión que nos es específicamente chilena: la dificultad de las fuerzas de izquierda para arancelar las cuestiones de género, sexualidad, familia y aborto para no perder votos o construir alianzas con sectores más al centro. Esta forma de proceder ocurrió claramente en las elecciones brasileñas de 2022 porque Lula, en un primer momento, defendió la tesis de que el aborto es un grave problema de salud pública, para después retroceder por temor a los efectos de esta posición en el electorado evangélico. En la segunda vuelta, la campaña del PT fue aún más lejos, recurriendo a la demonización del aborto para acusar a Bolsonaro, es decir, reverberando la agenda de la ultraderecha. Por otro lado, no se puede afirmar que Lula no hubiera sido acusado de abortista por la campaña de su adversario, aunque no hubiese hablado del tema ya que el mismo fue y será siempre un blanco prioritario de la ultraderecha.

En el debate, Talita compartió las reflexiones de Kas Mudde, politólogo holandés experto en extrema derecha, las cuales son útiles para problematizar esta forma de proceder de las izquierdas. Para Mudde, el mayor reto del campo progresista hoy es no caer rehén o convertirse en caja de resonancia de la ideología ultraconservadora y ultraderechista: recular no es el mejor camino. Por el contrario, es necesario reaccionar, explicitar nuestras visiones y posiciones, des demonizar "nuestra ideología" convirtiéndola en una agenda positiva.

PARA CONCLUIR

Aun cuando las condiciones y factores subyacentes a las turbulencias en curso en México, Chile y Perú sean en muchos aspectos distintas hay varios trazos comunes a subrayar. Son ellos la persistencia de desigualdades, la penetración continuada de la racionalidad neoliberal, debilidades y distorsiones de los sistemas políticos electorales, la presencia y crecimiento del ultra- conservadurismo y de la ultra-derecha y, tanto en Perú como en México, una flagrante militarización de lo político. Con grados y tonalidades diferentes esos elementos están presentes en las dinámicas de desdemocratización en curso en América Latina, en la cuales también está siempre en juego la politización del género y de la sexualidad en sus varias vertientes. En los comentarios finales de la conversación, alguien preguntó si toda la incertidumbre paradójica examinada en la conversación no debería ser vista como una oportunidad para soñar con nuestras nuevas utopías pero también teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido en las últimas décadas en materia de activismo.

PERFIL DE LXS PANELISTAS

Ana Covarrubias es profesora-investigadora del Centro de Estudios Internacionales y actualmente Coordinadora General Académica de El Colegio de México. Su área de investigación es la política exterior de México principalmente hacia Cuba y Centroamérica, y los derechos humanos y la política exterior. Estudia también los conceptos de potencia media, emergente, regional, o entrepreneurial powers y el regionalismo latinoamericano.

Eliana Carlin, es politóloga y Magíster en políticas públicas, docente universitaria en la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica. Ha trabajado 9 años como servidora pública, incluyendo la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es fundadora de la asociación Heroínas Peruanas, que promueve la educación con enfoque de género en la niñez.

Talita Tanscheit, es investigadora Asociada en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales e Investigadora Colaboradora del Observatorio Político Sudamericano (OPSA), con sede en la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) en Brasil. Su principal área de investigación es la política comparada, especialmente en temas relacionados con los partidos políticos y las democracias en América Latina.

Comentarista: Mario Pecheny, Doctor en Ciencia Política por la Universidad de París III, Profesor Titular Regular de Sociología de la Salud/Políticas de Salud y Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja sobre derechos humanos y política en relación con la salud, el género y la sexualidad.

Este artículo refleja los análisis políticos y las reflexiones, con eje en las agendas de género, sexualidades y derechos humanos, que surgieron de las intervenciones de lxs panelistas y los intercambios posteriores con otras personas que participaron del webinar.